



Medellín, primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA
DEMANDADO: COLPENSIONES
PROCEDENCIA: JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001-31-05-006-2008-01102-02

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el apoderado judicial de la demandante **MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA** contra el auto del 03 de marzo de 2020, dictado por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

La señora MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA formuló demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES, solicitando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor ERNESTO RESTREPO LOAIZA.

La demanda fue fallada de manera adversa a todas las pretensiones de la actora, en primera y segunda instancia, de igual forma, el recurso de casación decidió no casar la sentencia, por lo que en conclusión, ninguna de las pretensiones salió adelante.

En la sentencia de primera instancia proferida el 16 de septiembre de 2011, se condenó en costas a la demandante MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA en cuantía de \$1'070.000.

En la sentencia de segunda instancia, se fijó como agencias en derecho a cargo de la actora la suma de \$200.000.

Y en la sentencia de casación, se condenó en costas a la parte recurrente MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA, en el monto de \$4'000.000.

DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La oficina judicial de la primera instancia, en decisión del 03 de marzo de 2020, dispuso aprobar la liquidación de costas, liquidando por concepto de agencias en derecho las siguientes sumas:

- Primera instancia: \$1'070.000
- Segunda instancia: \$200.000
- Casación: \$4'000.000

Total, a cargo de la demandante MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA \$5'270.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La demandante MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA, inconforme con la anterior providencia, interpuso recurso de apelación, indicando en síntesis que de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, al establecer los parámetros para la fijación de las costas y agencias en derecho, cuando la parte vencida es el trabajador, en caso que la demanda prospere parcialmente, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, lo cual por ende, también cobija las agencias en derecho.

En ese sentido, afirma que en este caso debe analizarse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencida, la cuantía y otras circunstancias, teniendo en cuenta además la absolución de las pretensiones, la práctica de pruebas poco onerosas y menos desgastantes para la administración de justicia, por ende no se ajusta a derecho la cuantía liquidada por la secretaria del despacho por concepto de costas y agencias en derecho, las cuales ascendieron a \$1'070.000, las de segunda instancia en suma de \$200.000, y la impuesta por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral de \$4'000.000, para un total de \$5'270.000, sumas que considera bastante onerosas,

más aun si se tiene en cuenta que la parte vencida en juicio fue la parte más débil es decir, el trabajador-afiliado.

Por lo anterior, solicita a este Tribunal, la disminución del valor de la liquidación de costas y agencias en derecho.

DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Corrido el traslado para presentar alegatos de conclusión, ninguno de los apoderados de las partes hizo uso de este derecho.

Por ser competente esta superioridad para conocer del recurso de apelación contra el auto que aprobó la liquidación de costas conforme al numeral Nral 11 del Art. 65 del CPTSS y el Nral. 5º del Art. 366 del CGP se procede a resolver el mismo, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

Se circunscribe en establecer si se debe modificar o mantener el monto de las agencias en derecho fijadas en primera instancia.

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Establecido lo anterior, se tiene que la recurrente no está de acuerdo con el valor de las costas aprobadas por la a quo, en suma total de \$5'270.000, debido a que considera que éstas son onerosas conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

Para resolver, primeramente se debe manifestar, que incurre en desatino jurídico el apoderado recurrente, al reclamar que las costas se fijen conforme a las preceptivas del Acuerdo PSAA-16-10554 del 05 de agosto de 2016, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues el Art. 7 del mismo, claramente establece que sólo se le aplica a los procesos iniciados a partir de la

fecha de su publicación, por lo que al haberse iniciado este proceso en el año 2008 no se rige por el citado Acuerdo.

Ahora, los demás argumentos de la apelación, referidos a que se debe reducir el valor de las costas y agencias en derecho efectuada por el Despacho de instancia, debe la Sala traer a colación lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P. modificado por el artículo 43 de la Ley 794 de 2003, aplicable en materia laboral, por remisión que hace el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., establece lo siguiente:

“Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 (26 de junio), vigente para la fecha de inicio del proceso, establece el marco de las agencias en derecho en materia laboral en proceso ordinario a favor del empleador así:

“2.1.2. A favor del empleador:

Única instancia. Hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Primera instancia. Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia. Hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Adicionalmente, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual establece:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. *En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.”

Conforme a la norma transcrita, es evidente que los argumentos de la apelación no tienen vocación de prosperidad, pues en primer lugar, el Literal 2.1.2. del del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, establece unos montos máximos por concepto de agencias en derecho, cuando la parte vencida es el trabajador, y dado

que en este caso ninguna de las pretensiones de la demanda prosperó, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas se impone a la parte vencida en el proceso, tal y como ocurre en el caso de autos, en el que la parte demandante no logró el cometido de la demanda.

De esta manera, considera la Sala que la condena en costas impuesta en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, en la medida que el monto máximo que por concepto de costas en primera instancia se pueden imponer a favor del empleador o la administradora de pensiones, es de dos (2) SMLMV, y para el año 2011, en el cual se profiere la sentencia de primera instancia, el salario mínimo ascendía a \$535.600, es decir que el monto máximo a fijar era de \$1'071.200 y la establecida por el juez de instancia fue en suma de \$1'070.000, encontrándose dicho valor dentro de los parámetros contemplados en el citado Acuerdo, lo que además se ajusta a la realidad del proceso, pues aplicados los criterios antes referidos que sirven de base para fijar el valor de las agencias en derecho, se tiene que el litigio del presente proceso, buscaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, lo que es un litigio de mediana complejidad, si se tiene en cuenta que la controversia entre las partes era lo relativo a demostrar la convivencia de la demandante respecto del causante.

Asimismo, frente a la duración de este proceso, se trata de una demanda que fue presentada el 07 de octubre de 2008, que tuvo sentencia de primera instancia el 16 de septiembre de 2011 y de segunda instancia el 29 de abril de 2016, es decir, una duración entre primera y segunda instancia de 7 años y un poco más de 6 meses. Adicional a ello, en vista del recurso de casación presentado por la parte demandante, sólo vino a proferirse la respectiva sentencia el 21 de enero de 2020, esto es, otros 3 años y 9 meses más, por lo que, en total, el proceso tuvo un poco más de 11 años, duración que se ha generado debido a la alta congestión que desde años atrás y a la fecha, presentan los Despachos judiciales de nuestro país y al dispendioso trámite que implicó la primera instancia, por tratarse de un proceso en el que eran demandantes dos compañeras permanentes y una cónyuge, que además tuvo acumulación de procesos, lo que lo vuelve más complejo.

Ahora, respecto de las agencias en derecho en segunda instancia que fueron fijadas en el monto de \$200.000, este es menos de la sexta parte, del máximo permitido, si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal para el año 2016 que

se emitió el fallo de segunda instancia era de \$689.455, por lo que el máximo permitido era de \$1.379.000.

En lo concerniente a las agencias en derecho de casación, considera la Sala que estas están fijadas todos los años en un monto estándar, que no, puede ser modificado por el Tribunal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza y duración del proceso y los otros criterios mencionados, considera la Sala que las agencias en derecho se tasaron en debida forma atendiendo en estricto sentido el artículo 366 Núm. 4º del Código General del Proceso y el artículo 3º del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no hay lugar a modificar el valor de mismas y por ende se debe mantener la aprobación de la liquidación de costas impuesta por el *a quo*.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado que aprobó la liquidación de costas, proferido el 03 de marzo de 2020, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en el presente proceso de **MARÍA MATILDE ROJAS DE ZAPATA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-**.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión. los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **218** del **02 DE DICIEMBRE DE 2022**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **27a5aae3ad17fd7b9a366364b053c31129b31b02f143354f5388935d2dd6cea3**

Documento generado en 01/12/2022 02:33:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>